

La política económica española en un período conflictivo: 1926-1933.

Xosé Carlos Arias Moreira

*Departamento de Economía Aplicada
Colegio Universitario de Vigo
Apartado Postal 874 - 36200 Vigo*

**La política económica española en un
período conflictivo: 1926-1933.**

**Spanish Economic Policy in a Period
of Conflict: 1926-1933.**

RESUMEN

En este artículo se examina el carácter de la intervención pública sobre la economía española entre los años 1926 y 1933, mediante la aplicación de un esquema de análisis político-económico. Para ello, una vez establecida una periodización en tres subfases, que tienen que ver con los cambios en la situación política general, se pasa revista con criterios comparativos a los cuadros de objetivos y a los distintos conjuntos de actuaciones destinadas a alcanzarlos.

Todo ello permite concluir que existió una importante vía de continuidad entre las políticas económicas de la Dictadura y la II República, localizable en la ausencia de un concepto de la política económica con suficiente consistencia interna, en el escaso rigor de su proceso de elaboración y en la contradicción entre los objetos proclamados y las políticas específicas ejecutadas. Lo que no impide señalar algunas notables diferencias: necesidad de afrontar muy distintos condicionantes políticos y coyunturas internacionales, concepción diversa del crecimiento y actitud muy disímil en el frente distributivo.

ABSTRACT

In this paper we examine the nature of public intervention in the Spanish economy from 1926 to 1933, by means of a political-economical analysis. Having made a division in three periods which are related to the changes in the general political situation, we comparatively review the structure of the goals and the different means used to achieve them.

All this leads us to the conclusion that there existed a remarkable continuity between the economic policies of the Dictatorship and the Second Republic, observable in the absence of a genuine conception of economic policy, in the lack of rigour in its elaboration and in the contradiction in the proclaimed goals and the specific policies that were carried out. This does not mean that there weren't some notable differences: distinct political conditions and international economic situations, different ideas of growth and very dissimilar attitudes in the field of distribution.

La política económica española en un período conflictivo: 1926-1933.

Nos proponemos exponer y analizar en este trabajo la política económica desarrollada en España durante un período realmente conflictivo y repleto de interés: los años que van desde 1926 a 1933, es decir, durante la segunda mitad de la Dictadura del General Primo de Rivera y el primer bienio de la II República.

El análisis económico de ese período resulta en nuestra opinión altamente interesante al menos por dos motivos: por producirse a lo largo de él un cambio político de dimensiones históricas, y porque coincide con una de las grandes crisis del capitalismo como sistema económico. Es en función de esas dos cuestiones que adquieren una singular relevancia el estudio del grado de vinculación de la economía española de entonces con el exterior y el sondeo en la urdimbre de relaciones existentes entre la economía y la política.

Por otro lado, se trata en general de un período poco conocido en sus aspectos económicos —a diferencia de lo que ocurre con los políticos y culturales— y que tuvo una mayor trascendencia de lo que se suele creer sobre los criterios posteriores de elaboración de la política económica española. Pero es obligado señalar que en el último lustro se ha producido una considerable labor de investigación científica en relación con este tema, merced a lo cual se ha afinado considerablemente en la posibilidad de formular conclusiones¹, superándose así con claridad muchas de las explicaciones un tanto mixtificadoras que abundaban no hace mucho tiempo.

1. Puede afirmarse que la mayoría de las aportaciones registradas en los últimos años —que recogemos en la lista bibliográfica adjunta— se mueven en una misma línea argumental, que es precisamente la que nosotros recogemos aquí, pero no faltan polémicas ni opiniones contradictorias respecto de diversas cuestiones específicas. Al margen de problemas de interpretación, en más de un caso la controversia es debida a deficiencias en la información estadística original (series poco fiables, no homogéneas, etc.). Nosotros hemos optado por obviar esos problemas, por no ser éste el cometido de este trabajo, y simplemente recogemos las series que nos parecen mejor elaboradas sin entrar en discusiones sobre ellas.

En el ámbito de esa dinámica de mejora en el conocimiento a que acabamos de aludir, consideramos que es necesario un esfuerzo de síntesis desde el punto de vista estrictamente político-económico; este trabajo pretende, mediante la aplicación de un esquema de análisis y un aparato conceptual de política económica, contribuir de algún modo a ese esfuerzo.

1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Antes de introducirnos de lleno en el examen de la política económica española de aquel momento, parece conveniente dar una visión panorámica de su contexto internacional.

Los años que van de 1925 a 1929 —ello es ampliamente conocido— marcan una época de prosperidad en la economía mundial. La expansión de la producción y la renta son un hecho evidente, y muchos países viven sus propios “booms” económicos. Sin embargo, no se trataba de una prosperidad exenta de zonas sombrías y elementos preocupantes.

En efecto, el fuerte crecimiento no se repartió homogéneamente, ni en el tiempo, ni entre los países ni entre los sectores de la producción. En general, fueron los sectores industriales nuevos (como la fabricación de automóviles, las industrias químicas y las eléctricas) las que más crecieron, y consiguientemente, lo mismo ocurrió con los países que basaron su expansión en esos sectores y en la introducción de nuevas técnicas productivas y organizativas. Mientras tanto, los sectores más tradicionales de la industria empezaban ya a dar muestras de sobreproducción.

Es interesante constatar que para el conjunto de la industria la inversión cae a partir de 1925, por lo que la ola de prosperidad parece deberse sobre todo a las ingentes inversiones anteriores.

Pero más grave era la situación en los mercados agrarios. La sobreproducción y el subconsumo de productos agrarios, que en 1928 daban ya paso a un estado de absoluta saturación, introducían una muy importante tendencia a la deflación estructural en el sistema económico mundial, con notables efectos perturbadores.

El otro gran factor desencadenante de la crisis fue el enorme descontrol reinante en los flujos internacionales de capital. Desde el final de la I Guerra Mundial muchos países venían estando en una delicadísima situación financiera, agravada por los pagos por deudas y reparaciones de guerra, que a partir de mediados de los veinte, sobre todo, trató de corregirse mediante operaciones de préstamo generalmente a corto plazo.

Esta situación, en la que la principal nación prestamista era Estados Unidos, producía una falsa imagen de estabilidad internacional. Por poner un ejemplo, gran parte del esfuerzo industrializador producido en Alemania en esos años, el cual generaba una sensación de recuperación real de su economía, estaba en función de esos flujos prestamistas.

Por eso, cuando a finales de los veinte se produjo la retirada masiva de capitales norteamericanos, no es de extrañar que comenzara el derrumbe en muchos países, señaladamente los de Europa central y oriental.

Por todo ello, parece correcto afirmar que el sistema económico surgido de la I Guerra Mundial llevaba en su propio núcleo las fuerzas depresivas que habrían de consumarse con violencia en los años treinta². En realidad, se trató de un período intermedio, de transición, entre dos fases distintas en la evolución del sistema capitalista³, en el cual se procedió a la sustitución inapelable de Inglaterra por EE.UU. como centro del poder económico mundial.

En cualquier caso, parece claro que los signos más identificadores de la crisis de los años treinta fueron la intensa caída de los niveles de precios, el hundimiento del comercio mundial, la producción y la renta⁴, la aparición de inmensas bolsas de desempleo y la multiplicación de los conflictos sociales y políticos.

Igualmente parece fuera de toda duda que tanto la carrera proteccionista —en realidad, guerra comercial abierta— comenzada en 1930, como la ausencia y una mínima cooperación internacional, sobre todo en lo monetario y financiero, actuaron como elementos de amplificación y verdaderos mecanismos de transmisión de la crisis de unos países a otros. También el anclaje, en los primeros años de la recesión, al sistema de ideas, instituciones y prácticas político-económicas liberales tuvieron una responsabilidad en ese agravamiento⁵.

2. DATOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA

En ese ámbito general se desarrolló la estructura económica de la España de la época, caracterizable, en lo fundamental, por algunos datos básicos que merecen ser destacados.

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, algunos rasgos de la estructura sectorial, muy sesgada hacia el sector primario. Así, en 1930 el

2. Morilla Critz, 1984, p. 181.

3. Palafox, 1980-a, p. 31.

4. Por ejemplo, en EE.UU. tanto el producto industrial como la renta personal se redujeron a la mitad entre 1929 y 1933.

5. Cfr. Morilla Critz, 1984, p. 181.

45,5% de la población activa trabajaba en la agricultura, frente al 26% en la industria y al 28% que lo hacía en el sector de servicios.

La agricultura, mayor fuente de actividad productiva, arrojaba importantísimos lastres de atraso, con una muy baja productividad y una falta de capital y tecnificación realmente paralizantes. Su parte más dinámica —los cultivos mediterráneos— fue precisamente la que más acusó la depresión internacional.

La evolución de las principales magnitudes económicas puede verse en el cuadro 1. En él se observa que la renta nacional sigue una tendencia inequívocamente creciente con sólo alguna inflexión coyuntural en ciertos ejercicios concretos. El incremento de la producción industrial es muy pronunciado a lo largo de los años veinte, pero entra en una depresión profunda con el cambio de decenio. Los precios, por su parte, siguen una evolución altamente estable (con una suave depresión en los treinta), estabilidad que contrasta vivamente con las tendencias internacionales.

Cuadro 1

Magnitudes básicas de la economía española 1926-34 (índices)

	Renta Nacional (a)	Producción industrial	Exportaciones	Importaciones	Precios
1920	100	100	100	100	100
1926	116,5	133,2	105,7	110,5	78,2
1927	123,2	137,1	112,2	120,4	75,2
1928	126,2	150,1	124,8	139,5	72,8
1929	129,5	149,7	116,2	141	75,1
1930	128,8	157,7	119,5	126,2	74,8
1931	131,2	141,4	102,5	101,6	75,5
1932	136	140,2	84,6	116,6	74,6
1933	134,6	138,6	78,7	102,8	71,2
1934	141,3	141,8	80,9	116,1	73,1

Nota: (a) A precios constantes.

Fuentes: J. Alcaide, "Una revisión urgente de la serie de renta nacional española en el siglo XX", IEF, 1976; A. Carreras, "La producció industrial espanyola i italiana desde mitjan segle XIX fins a l'actualitat", tesis doctoral, UAB; "International Abstract of Economic Statistics, 1931-1936", 1938; Ministerio de Trabajo, Boletín de Estadística, 1942. Recogido de Comín y Martín Aceña, 1984, p. 238.

El déficit exterior es una característica casi crónica de la economía española en esos años, como lo es el reducido porcentaje que representa el volumen de importaciones y exportaciones sobre el producto nacional, muy inferior al de los principales países europeos⁶.

Al hilo de esta caracterización general, en la secuencia de años 1926-1933 debemos necesariamente distinguir *tres etapas*, cuyos límites se nos muestran bien marcados. La primera va desde 1926 a comienzos de 1930, es decir, abarca el período final de la Dictadura del General Primo, en el cual los elementos de descomposición económica y política se van haciendo cada vez más patentes. La segunda etapa es de transición; se desarrolla desde la caída de Primo hasta la proclamación de la II República. Por fin, el 14 de abril de 1931 se inaugura la tercera de nuestras etapas; la elaboración de la política económica se inscribe a partir de entonces en un marco cualitativamente distinto respecto de la situación española de todos los decenios precedentes.

3. POLÍTICA ECONÓMICA DE LA DICTADURA

La Dictadura surgió en 1923 como una respuesta contundente a una *situación conflictiva*, de acuerdo con los intereses de los grupos dominantes⁷. Conflictiva desde luego en lo económico: España, como el resto de los países europeos, acusó la crisis de los primeros años veinte, consecuencia directa del fin de la Guerra Mundial⁸. Conflictiva también en lo social: no cabe duda de que un móvil central de la Dictadura era sofocar las tensiones sociales y las reivindicaciones en ascenso de los trabajadores de distintos sectores. Y por fin, conflictiva en lo político —el sistema bipartidista que había servido de sostén a la Restauración aparecía a comienzos de los veinte como totalmente desprestigiado y falto de aliento— y lo militar, como efecto de la mala marcha de las guerras norteafricanas.

Muy afortunada nos parece la expresión, acuñada por autores como García Delgado, de que la Dictadura supuso el asentamiento, la *confirmación de la vía nacionalista del capitalismo español*⁹, la cual se había fraguado en los últimos lustros del siglo XIX¹⁰. Tal afirmación nos sirve para encuadrar las que consideramos como características funda-

6. En 1928, por ejemplo, mientras en Austria las importaciones rondaban el 30% del PNB y el 25% en Inglaterra, en España se mantenían alrededor del 9,5%.

7. García Delgado, 1983, pp. 808-810.

8. Téngase en cuenta, por ejemplo, que el 50% de las empresas creadas en España entre 1916 y 1920 hubieron de cerrar en los tres años siguientes. Cfr. Tortella y Palafox, 1983, p. 41.

9. García Delgado, 1985, pp. 177-182.

10. Tanto en el terreno de los hechos como en el puramente doctrinario. Sobre este último aspecto, cfr. J. Velarde Fuentes, 1979, pp. 83-89.

mentales del comportamiento económico de la Dictadura:

1º) Desarrollo intenso de las tendencias autárquicas, potenciadas desde el poder político.

2º) El proteccionismo de la producción española frente a la competencia externa alcanza cotas elevadísimas. Así, la Sociedad de Naciones llegó a denunciar en 1926, acaso un tanto exageradamente, el proteccionismo arancelario español como el más elevado del mundo. Un proteccionismo que incluso llegó a definirse desde el propio poder político como "integral" y que adoleció siempre —según dejó claro ya en su día Román Perpiñá— de una enorme falta de coordinación y coherencia interna, pues muchas veces la protección a sectores diversos se superponía entre sí¹¹.

3º) Intenso proceso de concentración de capital: Es el mismo Estado el principal artífice de una concentración económico-financiera que beneficia a los principales grupos privados¹²: en esa época se constituyen con apoyo público importantes monopolios privados, sobre todo en los sectores de la industria básica, y se extienden las prácticas de tipo monopolístico.

4º) Organización corporativa de la producción: la Dictadura articuló un complicadísimo mecanismo corporativo, creando infinidad de comités sectoriales de carácter cuasipúblico, con participación directa de los intereses industriales y agrarios privados. En la cima de esos comités se encontraba desde su constitución, en 1924, el Consejo de Economía Nacional, que poseía importantes funciones en la regulación global de la economía.

La confluencia de todos esos factores dio origen a un extraordinario nivel de intervencionismo estatal en la economía, cuyo contenido concreto será analizado con mayor detalle un poco más adelante.

Por otro lado, la concepción económica general de los dirigentes de la Dictadura era extremadamente simplista y en muchos de sus aspectos puramente voluntarista. Además, el rigor analítico brillaba por su ausencia en los círculos doctrinales con influencia sobre el poder —como los que se movían en torno a la Revista Nacional de Economía—, desde donde se concentraban las posiciones ultranacionalistas, en las que era perceptible el influjo de los escritos de algunos historicistas alemanes¹³.

Interesa ahora detenernos por unos momentos en la descripción de los agentes decisores de la política económica, de los *policy-makers*. Entre los grupos sociales que apoyaron decididamente a la Dictadura desde

11. García Delgado, 1985, pp. 184-187.

12. Velasco, 1979, p. 154.

13. Muy satisfactoriamente explicado en García Delgado, 1983 (pp. 810-815) y 1985 (pp. 179-182), y en Velasco, 1979, pp. 157-181.

su mismo nacimiento destacan la banca y la burguesía industrial catalana y vasca; los grandes propietarios agrarios y la pequeña burguesía permanecieron expectantes pero prestos a la colaboración con el poder¹⁴. En sus años finales, sin embargo, la Dictadura se fue enajenando progresivamente una parte de sus apoyos sociales, por las razones que más adelante se explicitarán.

Aunque en la Dictadura se repitiera continuamente la frase “la política ha muerto” y se exaltaran “la técnica” y “la eficacia” frente a “lo político”¹⁵, lo cierto es que los grandes intereses económico no dejaron de tener una representación muy directa ante los poderes públicos. Lo más característico de la Dictadura fue, en este orden de cosas, el elevadísimo grado de *institucionalización de los grupos de presión*. Los múltiples organismos de intervención económica —desde el Comité Regulador de la Industria Algodonera a la Comisión Mixta del Nitrógeno— con la participación en ellos de las principales empresas de cada sector, favorecía de cierto la canalización de las presiones¹⁶.

En tal contexto no es extraño que abundaran las denuncias o sospechas de corruptelas y negocios oscuros en esos años¹⁷.

El *cuadro fundamental de objetivos* de la política económica del Directorio civil estaba integrado por los cuatro siguientes: En primer lugar, el crecimiento de la producción, sustentado sobre la dinamización de la actividad industrial y las grandes iniciativas de obras públicas e infraestructuras. En segundo lugar, la estabilidad del tipo de cambio de la peseta, que debería conducir a la implantación del patrón-oro. En tercer lugar, la obtención del equilibrio presupuestario y el ajuste a un principio de disciplina financiera. Y por fin, en último lugar, la estabilidad de los precios interiores.

Nos parece claro que no todos los objetivos declarados alcanzaron cumplimiento, y que incluso se dieron importantes trade-offs entre algunos de ellos: es el caso de los existentes entre estabilidad de precios y estabilidad del cambio o entre el equilibrio presupuestario y la expansión productiva.

Para evaluar de una forma más concreta el grado de obtención de esos objetivos centrales se requiere examinar la evolución de los distintos grupos de medidas elaboradas. Siguiendo un criterio bien conocido, nos referiremos por separado a las políticas de producción, esto es, sectoriales, a las políticas instrumentales y a las de reforma estructural.

14. Cfr. Velasco, 1979, pp. 135-136.

15. En un planteamiento que desde luego recuerda bastante a la moderna tecnocracia. Cfr. Velasco, 1979, p. 146.

16. Tuñón de Lara, 1967, pp. 97-113.

17. Tales como el asunto de la concesión de CAMPSA y la distribución de su red territorial o el del ferrocarril Ontaneda-Calatayud. Palafox, 1980-b, p. 33.

Las *políticas de producción* se movieron en dos frentes distintos, casi diríamos opuestos: si por un lado se dirigieron a la reactivación de la actividad productiva, por otro muchas veces se resolvieron en actuaciones meramente defensivas¹⁸.

Es harto conocido que las bases de la fuerte industrialización de ese período se asientan fundamentalmente sobre la estrategia de modernización de la infraestructura del país. Particularmente relevante fue la política de ampliación de la red ferroviaria, en la que tuvo una trascendencia singular la aprobación del Estatuto Ferroviario de 1924, por el cual el Estado se comprometía a aportar los capitales básicos para la modernización de los ferrocarriles. También alcanzaron una cierta significación la política hidráulica y la de mejora de carreteras. Todo ello repercutió muy favorablemente sobre la demanda de los sectores de la industria pesada, principalmente la siderometalúrgica, la cementera y la de la hulla, convirtiéndose en un factor de impulso de primer orden para todas ellas¹⁹.

Por otro lado, los responsables económicos de la Dictadura diseñaron una extensa malla de programas intervencionistas de estímulo a la llamada "industria nacional", destinados a la formación de capital social fijo. Entre esos programas destaca el llamado *Nuevo Régimen de Auxilios* de 1924, que incorporaba ventajas fiscales, pedidos directos de la administración e incluso medidas para mantener el beneficio²⁰.

Había además toda una política de salvaguarda de la competencia interna, en la que jugaban un papel decisivo los organismos corporativos sectoriales (lo que llevó al egregio economista Flores de Lemus a observar un verdadero "horror al mercado", a la libre competencia); si a ello se une la ya mencionada protección arancelaria desmedida, no parecerá incorrecto hablar de *industrialización dirigida y de contención de la competencia*²¹.

Cabe preguntarse por los resultados de esa estrategia industrializadora. Es cierto que se operó durante la Dictadura un fuerte crecimiento industrial —fácilmente observable en el cuadro 1—, pero tal crecimiento resultó ser muy desigual. La labor estatal de apoyo favoreció a sectores de la industria básica fuertemente intensivos en capital y con capacidad productiva subutilizada desde un decenio atrás; pero en la mayoría de los casos el incremento del producto no conllevó evolución parecida de la productividad: de hecho se constata un escaso aumento de la competitividad de la industria española en ese período, y ello no parecerá extraño si se tiene en cuenta que para la más mínima innovación técnica

18. García Delgado, 1983, pp. 808 y sgtes.

19. Velarde, 1973, p. 128.

20. Tortella y Palafox, 1983, pp. 41-42.

21. Según la expresión utilizada en su día por el profesor Velarde (1973).

cualquier empresa había de pasar por un complejo proceso burocrático-administrativo²².

En términos generales, cabe decir que sólo de forma parcial y localizada sirvió la inversión pública directa como elemento de impulso a la privada.

Y en todo caso, debe también tenerse en cuenta que otras importantes ramas de la industria —casi toda la industria de consumo, y en primer lugar, la algodonera— permanecieron por completo al margen de la expansión: el bajo nivel y nulo crecimiento de los salarios²³ y la escasa capacidad de compra de los agricultores eran las principales razones de ese estancamiento²⁴.

Lo que realmente existió en la España de esa época fue una *actitud intervencionista* de gran intensidad y tensión, en lugar de una intervención político-económica expansiva coherente: es decir, contra lo que algunas veces se ha tendido a creer, no se operó realmente el nacimiento de un sector público con objetivos racionalizadores para todo el sistema productivo, sino un mero oscurecimiento de los límites entre la esfera pública y la privada²⁵.

Por lo demás, el complicado aparato corporativo-intervencionista devino en una importante fuente de ineficacia: lo que pudo comenzar siendo un factor de reactivación para una industria sometida a fuertes estrangulamientos, acabó por convertirse en los años 1926-1929 en una suerte de corsé, de rémora, para el propio sistema industrial, debido a las fuertes rigideces que introdujo en las estructuras productivas²⁶.

En el manejo de las *políticas instrumentales*, para la obtención de los equilibrios básicos, lo primero que reclama nuestra atención es el escaso número de instrumentos disponibles y su escasa capacidad para generar efectos económicos.

Ello destaca con luz propia en el caso de la *política monetaria*. En efecto, la política monetaria del decenio de los veinte estuvo gobernada por las disposiciones de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, la cual prohibía expresamente las operaciones de mercado abierto y no establecía coeficiente de caja alguno para la banca comercial²⁷. En tales condiciones, el único instrumento operativo resultó ser el tipo de descuento del Banco de España, el cual, por otra parte, se mantuvo sin

22. García Delgado, 1985, pp. 191-192.

23. El índice de salarios reales se redujo claramente a lo largo de los años veinte. Según datos de Velarde (1973), tomando un índice 100 para 1914, en 1920 se alcanza el 129, para bajar luego al 106 en 1925 y al 103,8 en 1930.

24. Tortella y Palafox, 1983, p. 41; García Delgado, 1983, p. 820.

25. García Delgado, 1985, p. 191.

26. Velarde, 1973.

27. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 245.

cambios entre 1923 y 1928 (tal y como se puede observar en el cuadro 2).

Durante los últimos años del régimen dictatorial la política monetaria fue suavemente expansiva, sin que se produjeran en ningún momento saltos bruscos en la evolución de los agregados monetarios; para el caso de la oferta monetaria ello puede ser fácilmente comprobado en la primera serie recogida en el cuadro 2. En realidad, la política monetaria fue, en nuestro criterio, durante todo este período, bien poco meditada, por no decir prácticamente inexistente como tal política (pues que no era en modo alguno fruto de un esquema y una estrategia previamente establecidos de forma consciente). En esas condiciones parece correcta la afirmación de que "la cantidad de dinero simplemente tendió a adaptarse pasivamente al ritmo de crecimiento de la demanda de saldos reales"²⁸, lo que quiere decir que la actuación monetaria fue muy poco beligerante sobre la marcha de la economía. Tan sólo la preocupación por la cotización de la peseta introdujo alguna distorsión en esa situación.

Cuadro 2

Variables monetarias. Evolución de la oferta monetaria y los tipos de interés. (miles millones pesetas, porcentajes)

Oferta monetaria(a)		(b) Tipos de interés del Banco de España	
		Tipo redescuento	Tipo de créditos con garantía fondos públicos
1925	9,9	5	4,5
1926	9,7	5	4,5
1927	10,3	5	4,5
1928	10,9	5	4,5 - 5
1929	11,65	5,5	4,5 - 5
1930	12,4	6	5 - 5,5
1931	11,9	6,5	5 - 5,5
1932	11,8	6	5 - 5,5
1933	11,9	6	5 - 5,5
1934	12,25	5,5	5 - 5,5

Notas: (a) En miles de millones de pesetas; (b) No todos los tipos de referencia anuales corresponden al mismo mes.

Fuentes: Banco de España, Memorias anuales y Circulares; Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 247.

28. Martín Aceña, 1984, p. 297.

Política fiscal. Al someter a examen los presupuestos de los años 1926-1929, cuando Calvo Sotelo era ministro de Hacienda, es fácil captar la absoluta falta de correspondencia entre lo proclamado desde el poder político y lo realmente realizado²⁹.

Efectivamente, Calvo Sotelo siempre proclamó su apego a la ortodoxia presupuestaria clásica. No se conformó con la necesidad de conseguir el equilibrio en las cuentas del Estado, sino que repetidamente afirmó que ya existía superávit desde 1927, lo que a todas luces era incierto.

La explicación de esa disparidad de valoraciones radica en lo siguiente: entre 1926 y 1929 existió un llamado *presupuesto extraordinario*, al cual se fueron transvasando algunos importantes conceptos y partidas del ordinario. El presupuesto extraordinario saldó siempre con acusados déficits y su financiación se realizó a través de emisiones de deuda pública pignorable.

Pero es que, además, en ese período proliferaron las denominadas *cajas especiales*, autónomas en su gestión y financiación, la más importante de las cuales era sin duda la *Caja Ferroviaria del Estado*. Pues bien, y creemos que éste es un dato más que significativo, el déficit de esta caja fue en algunos años, por sí solo, más elevado que el de los presupuestos ordinario y extraordinario (tal y como se puede apreciar en el cuadro 3).

Un breve comentario merece la forma de financiar buena parte del gasto total del Estado a través de emisiones de deuda pública pignorable. A este mecanismo se le ha achacado tradicionalmente ser causante de la generación de fuertes tensiones inflacionistas, lo que para este período no nos parece exacto. Pues si bien es indudable que suponía una distorsión en la implementación de la política monetaria, no lo es menos que las posibilidades de pignoración generalmente no fueron aprovechadas, pues los títulos públicos ofrecían una alta rentabilidad a sus principales detentadores, las instituciones financieras³⁰.

Los déficits presupuestarios son, por tanto, en esa época, una realidad incontestable, lo que supone un fracaso en la obtención de uno de los principales objetivos político-económicos que hemos citado. Sin embargo, es preciso puntualizar de inmediato que su efecto sobre la reducción de la economía real fue reducido, debido al pequeño tamaño que por entonces tenía el sector público (entre un 10 y un 13% de la renta nacional)³¹.

29. Melguizo, 1979, p. 402. Para conocer las explicaciones de Calvo véase Calvo Sotelo, 1974.

30. Martín Aceña, 1984, pp. 113-128.

31. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 249; Melguizo, 1986, p. 241.

El verdadero problema de la política fiscal, con todo, creemos que radica, no tanto en la entidad cuantitativa del saldo, cuanto en la *inadecuada estructura del presupuesto*, así en la vertiente del gasto como en la del ingreso.

Cuadro 3

Resultado del saldo presupuestario (1926-1929) (en millones de pesetas)

	Presupuesto Ord.	Presupuesto Extraord.	Caja Ferroviaria	Total
1926	- 319	- 81,1	- 49,2	- 449,3
1927	- 21,8	- 311	- 276,5	- 611,3
1928	185,5	- 445	- 443,1	- 703,5
1929	134,8	- 459,8	- 585,7	- 910,7

Fuente: Melguizo, 1986, p. 230.

El *gasto público* subió un par de puntos porcentuales desde el comienzo al final de la Dictadura, pero a lo largo de toda ella presentó una composición crecientemente desequilibrada, con un peso excesivo de los componentes estructurales y con escasa capacidad de impacto multiplicativo. Así por ejemplo, en 1929 los intereses de la deuda pública representaban casi el 28% del gasto total, frente a un 3,2% de pensiones, un 4,5% en educación y un 13,5% en fomento³². Para el conjunto de años 1926-1929, el gasto en formación bruta de capital fijo apenas alcanzó el 8% del gasto total.

Más grave aún era la estructura de los ingresos. La nivelación presupuestaria sin duda exigía actuar sobre el ingreso, pero eso chocaba de frente con los intereses dominantes.

La carga tributaria se repartía de forma muy poco equitativa. Lo principal de la imposición descansaba sobre los impuestos indirectos. Con una mentalidad actual no puede sino resultar chocante el que al final de la Dictadura aproximadamente el 40% de la recaudación tributaria líquida procediese de la renta de aduanas y de los impuestos sobre azúcar, tabaco y loterías³³.

32. Melguizo, 1986, p. 234.

33. Según datos tomados de Melguizo, 1986, p. 251.

Calvo Sotelo elaboró diversos proyectos de reforma tributaria, el conjunto de los cuales se saldó con un absoluto fracaso, debido a la tajante oposición ofrecida por los grupos dominantes. Los más significativos de esos intentos bloqueados fueron los de introducción de una imposición personal sobre la renta y un impuesto sobre los consumos suuntuarios, así como la introducción de la obligación de los propietarios agrícolas de declarar el verdadero valor de sus rentas. Nada de eso llegó a fraguar.

Por lo demás, la lucha contra el enorme fraude fiscal continuó siendo una quimera, debiéndose el modesto aumento conseguido en la recaudación al propio incremento de la actividad productiva, y no a otro tipo de factores³⁴.

Uno de los problemas económicos que más preocupó a los responsables económicos de la Dictadura —y como luego veremos, también a los de los períodos siguientes— fue el del *cambio de la peseta*.

Todo indica que, en líneas generales, este problema fue muy mal comprendido en su fundamentación económica por los círculos gubernamentales, y que numerosas interferencias extraeconómicas contribuyeron siempre a desvirtuarlo.

Antes de nada hay que aclarar que en España estaba vigente, desde 40 años antes, un régimen de flexibilidad del tipo de cambio, que mantenía por tanto a la peseta alejada del sistema de patrón oro.

En 1926-1927 la cotización de la peseta, que en los años anteriores se había deslizado a la baja, cambia de tendencia. El alza tiene una explicación económica muy simple que está relacionada con los fuertes movimientos internacionales especulativos de capital: finalizadas las guerras de Marruecos y siendo amplias las perspectivas de inversión rentable, era lógico que los capitales a largo y corto plazo afluyeran hacia nuestro país. Pero Calvo Sotelo cometió el grave error de presentarlo como una muestra de la bondad intrínseca del régimen, lo que se convirtió en una peligrosísima arma arrojadiza cuando, a lo largo de 1928, la tendencia de nuevo se invirtió.

Entre 1928 y 1932 el tipo de cambio de la peseta se mueve en una línea de depreciación. Tal depreciación fue captada como algo que atentaba contra el honor nacional e interpretada como un signo de la decadencia económica del país³⁵. El fenómeno generó tan fuertes contradicciones en el seno de la Dictadura que puede decirse sin que medie hipérbole que actuó como un detonante para la destitución del propio Calvo Sotelo³⁶, cabiéndole por tanto un papel activo en el fin del régimen del General Primo.

34. Es significativo que Velarde (1973) hable de "fracaso en toda la línea" de la lucha contra la ocultación fiscal por parte de los Gobiernos dictatoriales.

35. Tortella, 1983, pp. 123-126.

36. Extensamente explicado en Eguidazu, 1979, pp. 299-350.

Cuadro 4

Tipo de cambio de la peseta
(pesetas por dólar)

1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
6,71	5,86	6,06	6,81	8,57	10,48	12,43	9,33	7,34

Fuente: Board of Governors of the FRS, "Banking and Monetary Statistics", Washington, 1943. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 238.

Lo más curioso del asunto es que esa depreciación no sólo era inevitable en las condiciones en que se movía la economía española (la tensión monetaria internacional favorecía ahora la salida de capitales extranjeros, había un déficit comercial creciente y una menor repatriación de capitales de españoles residentes en América), sino que además tendría en los años siguientes un efecto benéfico, pues había de servir de elemento de salvaguarda a la economía española frente a las presiones deflacionistas cada vez más poderosas en la economía internacional.

En 1928 se inaugura una fase contradictoria y paradójica de la política económica española, puesto que si bien en las declaraciones de principios gran parte de la política coyuntural parece orientarse hacia la estabilización de la peseta y la adopción del sistema de patrón oro, en la práctica las medidas que se aplican a tal fin son bien poco efectivas. Y a la vista de lo señalado en el párrafo anterior, cabe añadir que ello resultó afortunado para la economía del país.

Creemos que la causa del saludable fracaso de esa política se halla en que no fue acompañada de una actuación deliberadamente deflacionista sobre la economía interna³⁷, la cual, de haberse llevado a cabo, hubiera tenido sin duda efectos nefastos.

La conocida controversia habida entre Calvo Sotelo y Francesc Cambó a finales de 1928 tuvo un amplio eco en la España de la época³⁸. Cambó —al igual que la mayoría de los mejores economistas, como Olegario Fernández Baños³⁹— defendía la estabilización de la peseta pero a un tipo real; excluía por tanto cualquier revaluación, lo que parece desde la perspectiva de hoy una posición sensata.

37. Una afortunada explicación de ese hecho puede encontrarse en Martín Aceña, 1983-c, pp. 338-339.

38. Acerca de esta controversia Cfr. Hernández Andreu, 1981, pp. 291-302.

39. Fernández Baños, 1930.

En ese ambiente de polémica se constituyó la llamada *Comisión para la implantación del patrón oro*, dirigida por Flores de Lemus. Su dictamen se nos presenta como el trabajo más riguroso realizado por entonces acerca de este problema: considera necesario tender hacia la implantación del patrón oro (sistema que, no debe olvidarse, estaba vigente en la mayoría de los países con los que España negociaba), pero planteaba como exigencias para esa implantación la previa nivelación real del presupuesto y la reducción del déficit exterior⁴⁰. En todo caso, se descartaba abiertamente la apreciación monetaria artificial, postura con la que habría de coincidir J.M. Keynes durante su visita a España en 1930⁴¹.

El dictamen no ejerció apenas influencia en el Gobierno de Primo, pero sí quedó como un importante punto de referencia argumental, llegando a adquirir un notable ascendiente sobre los gobernantes posteriores.

En lo que respecta a las *políticas de reforma estructural*, es bien poco lo que hay que decir para este período. La única que se llegó a plantear de forma abierta y clara —la ya mencionada reforma del sistema impositivo— se archivó tan pronto como surgieron las protestas de los grupos afectados.

Frente al proceso de industrialización, la realidad agraria permaneció inamovible y sumida en la depresión. El mantenimiento de las estructuras de la propiedad de la tierra se constituyó en uno de los móviles cardinales del régimen, por lo que obviamente no era posible esperar de él que afrontara lo que acaso fuera la principal exigencia objetiva de la estructura económica y social de España: la reforma agraria. Es por eso por lo que los propietarios agrícolas aceptaron apoyar un régimen cuya política directa de producción favorecía a otros sectores, ya fuera a través de prácticas proteccionistas o merced al sostenimiento de los precios de productos industriales⁴².

Llegados a este punto, hagamos una muy breve recapitulación sobre la naturaleza de la política económica de los años 1926 a 1929. En esa fase el modelo de expansión productiva diseñado por la Dictadura daba crecientes muestras de agotamiento. El mayor logro económico de que podía alardear el régimen —el credimiento industrial— aparecía bloqueado por la propia estructura institucional. Los márgenes en lo económico fueron haciéndose cada vez más angostos, lo que entremezclado con las crecientes tensiones políticas —fuerte impulso de la opinión republicana desde 1927— y sociales —aumento notorio de la conflictividad reivindicativa— anunciaban ya el final de ese régimen.

40. Flores de Lemus, 1960.

41. El Sol, 1930.

42. Velasco, 1979, p. 138.

Por otro lado, de los cuatro grandes objetivos de la política económica solamente dos, el crecimiento de la producción y la estabilidad de precios, obtuvieron un buen grado de cumplimiento (el primero de ellos con todas las contradicciones que hemos señalado). Tanto el equilibrio presupuestario como la estabilización y apreciación del tipo de cambio estuvieron muy lejos de ser alcanzados.

4. POLÍTICA ECONÓMICA DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Abordaremos ahora el breve período que transcurre desde enero de 1930 a abril de 1931, es decir, el período de transición en que los Gobiernos de Berenguer primero, y luego Aznar, sucedieron al Directorio civil de Primo. Es ésta una etapa muy interesante desde el punto de vista del análisis político-económico, ya que supone un principio de revisión de las prácticas anteriores de intervención y la introducción de un esfuerzo de racionalización en la dirección económica.

Cuando toma posesión el ministro de Hacienda del Gobierno Berenguer, Argüelles, es patente la necesidad de poner coto al enorme desbarajuste reinante en la economía española. El problema del déficit público, la entidad de la deuda pública en circulación, las muchas sospechas de casos de corrupción y la completa falta de respeto al principio de unidad presupuestaria resultaban altamente preocupantes.

El *programa Argüelles* fue planteado como un plan de saneamiento que, sin romper con las bases económicas de la Dictadura, favoreciese la solución de esos problemas. Sus medidas más significativas fueron las tres siguientes: la supresión de numerosos organismos corporativos (entre ellos la Caja Ferroviaria), la paralización de varios proyectos de obras públicas y, favorecido por lo anterior, el recorte presupuestario. De hecho, en el ejercicio de 1930 se obtiene superávit presupuestario, y ello es la única vez que acontece entre 1920 y 1936. En aquél año, además, no se procede a ninguna nueva emisión de deuda pública.

Las consecuencias inmediatas de esa política son fácilmente reconocibles: el ritmo de actividad industrial se vio frenado y en la economía toda surgieron tensiones recesivas. La reducción brusca de la inversión pública y de las compras masivas del Estado sacudió con fuerza a la industria básica, que comenzó así una etapa de aguda recesión⁴³. Esas medidas provocaron, además, un efecto-anuncio negativo que hizo que las expectativas de inversión no fueran ya favorables a principios de 1931⁴⁴.

43. Cfr. Palafox, 1980-a y 1980-b. García Delgado, 1980.

44. García Delgado, 1980, pp. 44-47. Melguizo, 1986, p. 244.

Hay que recalcar, con todo, para valorar justamente esta política, que las tendencias recesivas se concentraron en algunos sectores —que eran, eso sí, de la máxima importancia—, y que la caída de la producción industrial apenas afectó a la renta nacional ni al nivel general de precios, que se mantuvieron en lo fundamental estables.

Aunque desde la perspectiva de hoy esta política económica puede parecer desacertada, sobre todo por el hecho de que coincide en el tiempo con la recesión internacional —y ello ha llevado a hablar con cierta frecuencia del “error Argüelles”—, contemplado con los ojos de la época esa acción de saneamiento parece bastante razonable, casi diríamos inevitable, y como tal fue juzgada por los mejores economistas de entonces⁴⁵.

5. POLÍTICA ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA (1931-1933)

Durante la II República los problemas directamente políticos estuvieron, por lo menos en un primer momento, mucho más en primer plano que los económicos, lo que resulta comprensible por el clima en que vivía el país. Esa relativa despreocupación por la marcha inmediata de la economía es palpable ya en la firma del Pacto de San Sebastián, en el que no aparece referencia explícita alguna a los asuntos económicos. Igualmente significativa es la designación de Indalecio Prieto como ministro de Hacienda, contra su voluntad y a pesar de haber reconocido no poseer los suficientes conocimientos sobre economía y finanzas⁴⁶.

Pero todo ello no quiere decir que la República careciera de orientación económica, sino tan sólo que no se localizaba ahí su atención preferente. Esa orientación se articulaba en dos ejes fundamentales:

1º) La defensa a ultranza de los principios doctrinales ortodoxos: la mayoría de los dirigentes republicanos —comenzando por don Manuel Azaña— eran firmes partidarios de esos principios, sobre todo en lo referente a la ordenación de las cuentas del Estado. Ello se explica, al margen de su sustrato ideológico-liberal, como una reacción al entramado intervencionista-corporativo de la Dictadura, cuya desaparición tajantemente plantean. Los nuevos gobernantes perciben con toda claridad que los condicionantes administrativos habían estado cercenando las posibilidades del aparato productivo a medio plazo, por lo que se hacía necesario obligar a los productores a racionalizar sus explotaciones⁴⁷. En definitiva, se postula una economía de puertas abiertas en todas las direcciones.

45. Cfr. Tortella y Palafox, 1983, pp. 45-47.

46. Palafox, 1980-b, p. 35.

47. Calle, 1981, pp. 1478-79.

20) La voluntad de proceder a una transformación en profundidad de la estructura económica del país, lo que debería introducir una dinámica nueva de dimensiones históricas en la vida española.

Según tendremos ocasión de ir comprobando, ambas orientaciones básicas encontraron muchas dificultades concretas para poder plasmarse en disposiciones concretas, y además frecuentemente chocaron de forma frontal entre sí.

Podemos clasificar el conjunto de los problemas económicos que hubo de arrastrar la II república en tres categorías, tomando como criterio el origen de esos problemas⁴⁸:

a) Problemas heredados de la Dictadura: tales como la sobreinversión de la industria pesada, la estructura presupuestaria y el supuesto problema de la cotización de la peseta.

b) Problemas causados por la coyuntura internacional recesiva: cabe encuadrar aquí la retirada de capitales extranjeros y la baja experimentada por las exportaciones.

c) Problemas debidos al cambio político: es el caso de la depresión de las expectativas de inversión, la retirada de fondos de instituciones financieras y el aumento de la presión sindical.

Este último tipo de problemas nos sirve para introducir el análisis de la situación de los policy makers en los primeros años republicanos. Con el cambio de régimen, las élites políticas que venían ejerciendo el poder y representando a los intereses dominantes se ven alejadas de los niveles decisorios del Estado. Los nuevos dirigentes eran, en su gran mayoría, totalmente ajenos a aquellos intereses, lo que introdujo un punto de ruptura muy importante con respecto a la situación anterior⁴⁹.

Es verdad que el cambio en los decisores no significaba un cambio en las estructuras del Estado —en lo fundamental, los órganos del Estado, y en especial el aparato administrativo, continuaron siendo los mismos⁵⁰—, pero no por ello dejó de tener amplias repercusiones sobre los comportamientos sociales.

Otra mutación hubo en lo político que tuvo notable incidencia sobre la evolución económica: la producida en la configuración de los grupos de presión. Evidentemente, al desaparecer la organización corporativa de la producción, la canalización de las presiones perdió rango insti-

48. Tomamos esta agrupación de los problemas, que nos parece especialmente afortunada, de Tortella, 1983, p. 122.

49. Con todo, pasado el primer momento, se produjo un cierto acercamiento entre el Gobierno y los poderes económicos; así, tanto J. Carner como A. Viñuales —ministros de Hacienda en sucesivos Gobiernos republicano-socialistas— mantenían muy buenas relaciones con algunos importantes círculos financieros.

50. Tuñón de Lara, 1967 (p. 161) y 1985 (pp. 227-260).

tucional, por lo que los grupos industriales y agrarios se vieron a partir de entonces obligados a utilizar otros cauces para tratar de imponer así sus criterios y opiniones.

Por esas y algunas otras razones en las que ahora no vamos a entrar, el advenimiento de la República asustó sobremedida a las clases adineradas. Debido a eso se operó una gran crisis de confianza que a lo largo de todo 1931 deterioró gravísimamente las expectativas de inversión, provocando fenómenos de retirada de fondos de las instituciones financieras y canalización de capitales hacia el exterior; en ese año, las cuentas corrientes bancarias cayeron en un 35%.

Una vez diagnosticados someramente los problemas y conocidos los actores, examinaremos ahora la forma en que se articularon los distintos tipos de políticas durante el primer bienio republicano.

Nos referiremos en primer lugar a las *políticas de reforma estructural*, que en ese período sí encontraron formulaciones amplias y relativamente ambiciosas, aunque sus resultados prácticos se quedaron muy lejos de lo pretendido. Entre las reformas emprendidas por la II República figuran la del sistema educativo, la fiscal, la bancaria y, por encima de todas las demás, la reforma agraria.

No es en modo alguno nuestro propósito estudiar a fondo el carácter de la reforma agraria republicana —una de las cuestiones ya mejor estudiadas de la evolución de ese período—, pues ello excede las pretensiones y los objetivos de este trabajo, pero no podemos por menos que dedicar dos palabras a constatar que antes de la victoria del Frente Popular el reparto efectivo de tierras fue de muy escasas dimensiones, siendo la causa de ese fracaso, además de la oposición absoluta de los propietarios, la extrema complejidad y diversidad de la agricultura española (en cuanto a formas de propiedad y tenencia de la tierra, a los tipos de cultivos, etc.). Acaso resultaran más trascendentes para la marcha de la agricultura un conjunto de medidas adoptadas en los dos primeros meses de Gobierno provisional republicano, las cuales supusieron profundos cambios en los contratos de arrendamientos, así como subidas salariales y reducción de jornada para los jornaleros⁵¹.

Tampoco las amplias pretensiones de la *reforma fiscal* consiguieron llevarla a buen fin. En ese ámbito, según el profesor Calle, se acusó la falta de un verdadero criterio orientativo y sistematizado de reforma⁵². A la hora de la verdad, y a pesar de los múltiples debates parlamentarios sobre la materia, la tarea transformadora quedó circunscrita a la verdaderamente trascendente —pues que marca un hito en la historia fiscal española— creación de la contribución general sobre la renta y a la intro-

51. Calle, 1981, pp. 1461-63.

52. Calle, 1981, p. 1425.

ducción de una mayor transparencia para la fiscalización de las rentas agrarias.

La reforma introducida por la *Ley Bancaria de 1931* sí supuso un cambio en la organización institucional de la economía a tener en cuenta. Debida al empuje personal de *Prieto*, la aprobación de la ley generó apreciables tensiones entre el Gobierno y el Banco de España, entidad que por entonces era de carácter privado y se comportaba en gran medida como tal, a diferencia de la gran mayoría de los bancos centrales europeos.

La ley respondía a dos fines principales⁵³: primero, lograr una mayor influencia del Gobierno sobre la política crediticia del Banco de España, para que éste apoyase más intensamente los proyectos sociales y las reformas; y segundo, la necesidad de usar las reservas metálicas del Banco para reforzar la peseta e instaurar el patrón oro⁵⁴.

Para lograr esos fines se introducen como disposiciones fundamentales la elección de tres miembros del Consejo del Banco por el ministro de Hacienda, la supeditación de la política de tipos de interés a la aprobación del ministro y la sujeción de las cuentas del Banco a la inspección y control gubernamentales⁵⁵.

En definitiva, la *Ley Bancaria* afectó a la independencia del Banco de España, tratando con muy buen criterio de convertirlo en un verdadero banco central⁵⁶. En ese sentido, es muy conocido el comentario del profesor Sardá, para el que la ley de la que hablamos abrió el camino para la futura nacionalización del Banco⁵⁷.

Políticas de producción. Con la República se rompe decididamente con el tipo de crecimiento de las etapas anteriores⁵⁸. Entre las primeras decisiones de los nuevos gobernantes está el dejar en suspenso gran parte de la maraña legislativa preexistente, la cual afectaba a los sectores industrial y comercial⁵⁹.

La idea era liberalizar a toda costa, pero en la práctica esa forma de proceder resultaba muy complicada y difícil de implementar en

53. Tortella y Palafox, 1983, p. 49.

54. Al respecto ha escrito P. Tedde: "El objetivo central de la nueva ley, respondiendo a la obsesión de Prieto por el cambio de la peseta, era que se distribuyesen equitativamente entre el Banco y el Tesoro las pérdidas y ganancias derivadas de la intervención en el mercado monetario internacional, al tiempo que se incrementaba el control del Estado en la sociedad anónima que mantenía el derecho de emisión". Tedde, 1984, p. 262.

55. Tortella y Palafox, 1983, p. 49.

56. Incidentalmente cabe añadir, porque avala el buen sentido de Indalecio Prieto en este asunto, que entre los consejeros que nombró el Gobierno figuraba el profesor Flores de Lemus —que ejerció fuerte influencia sobre los criterios de actuación del Banco—, junto con el sucesor de Prieto en la cartera, Jaime Carner.

57. Sardá, 1970.

58. Calle, 1981, p. 1478.

59. Palafox, 1980-b, p. 40.

aquellos momentos. Piénsese por ejemplo en el caso del proteccionismo arancelario, del que los dirigentes republicanos eran decididos enemigos, pero cuyo nivel real apenas pudieron reducir: en un contexto comercial de guerra comercial creciente —provocada por la aprobación de la Hawley-Smoot Tariff en EE.UU., en 1930— proceder a una rebaja arancelaria unilateral hubiera sido un error incalificable. La liberalización del comercio interior, sobre la que pesaban unos condicionantes mucho menos rígidos, sí consiguió por el contrario salir adelante.

Los primeros años treinta fueron de aguda recesión para el sistema industrial español. La crisis repartió sus efectos de forma muy descompensada entre los diferentes subsectores industriales: son precisamente los sectores más oligopolizados y con más poder de influencia antes del 14 de abril, aquéllos que habían protagonizado el proceso de rápida industrialización del decenio precedente, los que más intensamente acusaron el golpe de la depresión. En efecto, según se deduce de la observación del cuadro 5, fueron la siderometalurgia, la industria cementera, la fabricación de maquinaria agrícola y la de medios de transporte las industrias más afectadas.

Si dejamos al margen a las industrias extractivas⁶⁰, las causas de esas dificultades no tienen que ver apenas, y ello interesa resaltarlo, con la crisis económica internacional, y sí, mucho, con ese cambio en el modelo de crecimiento interno al que hemos aludido. Y es que, indudablemente, la fuerte reducción de los proyectos de infraestructura, sobre todo los referidos a la red de ferrocarriles⁶¹, hubo de resultar fatal para un sector como el siderúrgico, para el que tanta importancia había tenido en el pasado la masiva compra de sus productos por parte del sector público; la intensa caída de la demanda resultó aquí decisiva. El ya mencionado deterioro del clima de confianza por motivaciones políticas vino a agravar todavía más la situación.

También el sector de la construcción, como es lógico, se vio mermado en sus ritmos de expansión por la reducción de las obras públicas, en primer lugar, pero asimismo fue afectado por la propia depresión de la industria pesada.

Tal y como se puede comprobar en el cuadro 5, tanto la industria química como la eléctrica consiguieron mantener e incluso incrementar su ritmo de actividad en los primeros treinta; en realidad, no hicieron otra cosa que reflejar con un cierto retraso la ola de innovaciones que se

60. En el caso de estas industrias, creemos que la crisis sí tuvo mucho que ver con la caída del comercio internacional, agravada, a partir de 1932, por el alza de la peseta. Cfr. Hernández Andreu, 1983, p. 299. Palafox, 1980-b, p. 16.

61. Piénsese que, por poner un ejemplo, según datos ofrecidos por el profesor Velarde, el índice de producción de raíles, que en 1922 había alcanzado el valor 44,9 (con base 100 en 1913) y el 210,1 en 1928, descendió hasta el 40,3 en 1932. Velarde, 1973.

habían producido en países más avanzados un decenio atrás, cuando esos sectores tenían un escasísimo protagonismo en España⁶².

Cuadro 5

Producción industrial 1929-1934 (índices)

	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Carbones	100	99,6	98,7	95,6	83,9	83,1
Energía eléctrica	100	105,8	110,3	116,2	114,9	119,9
Extrac. minerales	100	90,8	68,2	41,1	38,1	35,5
Metales	100	75,8	59,3	47,6	46,1	54,5
Maquinaria agric.	100	140,2	88,1	97,9	63,3	80,2
Medios transporte	100	60,9	49,7	16	10	11,2
Mat. construcción	100	101,6	89,8	78,1	77	75,1
Ind. química	100	106,7	98,7	98,1	107,2	115,2
Ind. alimentaria	100	104,4	118,1	115,8	110,1	133,5
Textil	100	126,6	122,3	135,5	124,9	131,6
Índice general	100	101,2	98,7	94,7	91	98,6

Fuentes: Consejo de Economía Nacional, "La Renta Nacional", p. 213. Tortella y Palafox, 1983, p. 57.

Pero mucho más significativa e interesante nos parece la evolución de la industria de consumo. Tanto el sector alimentario como el textil o el del calzado experimentaron considerables aumentos en su actividad productiva, lo que pone una nota de contrapunto a tener en cuenta para evaluar la situación general de la industria.

La clave para comprender este hecho está en el alza ciertamente acusada de los salarios reales, que entre 1930 y 1933 fue superior, en media, al 20%⁶³. Es indudable que los aumentos salariales respondieron más al aumento de las relaciones laborales —favorecidas en muchos casos desde el poder por motivaciones de justicia social— que a un razonamiento económico previo, pero los efectos económicos no dejaron de producirse: al operarse un proceso de redistribución de la renta, en fa-

62. Calle, 1981, p. 1482. En los treinta ese protagonismo no era muy superior.

63. En aquellos sectores industriales en que era más acusada la presencia sindical el aumento salarial fue superior, superando en ocasiones el 30%. Cfr. Palafox, 1980-b, p. 39.

vor de las rentas más bajas, el consumo se vio dinamizado. En un contexto de serias tensiones recesivas hubo aquí un elemento no premeditado pero muy efectivo de política anticíclica.

Cuadro 6

Salarios reales en tres sectores productivos (pesetas diarias en índices)

	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Minería	100	101,9	105,8	109,8	117,7	115,4
Metalurgia	100	101,6	104,9	106,9	115,2	113,3
Agricultura (a)	100	104,5	108,1	113,6	123,9	122,3

Nota: (a) Datos de salarios para mujeres solamente.

Fuentes: Anuario Estadístico de España 1943, Tortella y Palafox, 1983, p. 58.

Claro que los aumentos salariales tuvieron también sus consecuencias negativas, al tirar por los costes laborales de sectores que se encontraban ya en una situación de graves estrangulamientos⁶⁴. Pero su saldo neto parece positivo para el conjunto del sistema industrial.

Considerada como un todo, la industria española no consiguió recuperar al nivel de actividad de 1929 hasta seis años más tarde. Ello repercutió, naturalmente, sobre la situación del empleo. A finales de 1933 el paro alcanzaba el 7% de la población activa⁶⁵, porcentaje sin duda significativo (sobre todo si se tiene en cuenta la debilidad de los sistemas de cobertura social), pero que se mantenía muy por debajo de los de otros países o de los que se han dado en el nuestro durante la crisis de los setenta-ochenta⁶⁶.

La producción agraria, por su parte, siguió sumida en graves dificultades estructurales, que la crisis internacional no hizo sino agudizar. La quiebra del comercio internacional dañó muy singularmente a la agricultura de exportación localizada preferentemente en la cuenca mediterránea. Mientras tanto, para las agriculturas del centro y el sur de la

64. Palafox, 1980-a, p. 39. Hernández Andreu, 1980, p. 165.

65. Hernández Andreu, 1986, p. 159. Este autor argumenta que la tasa oficial de desempleo era algo inferior a la real.

66. Para enjuiciar correctamente el problema del desempleo durante el primer bienio republicano deben tenerse en consideración dos significativos cambios poblacionales: uno estructural (el descenso de la mortalidad) y coyuntural el otro (un cambio en el signo migratorio por primera vez en muchos años: el regreso de emigrantes se produce por la ilusión suscitada entre las clases pobres por el cambio político, los aumentos salariales y las expectativas de reparto de tierras). Cfr. Palafox, 1980-a, pp. 37-38.

Península, las buenas condiciones climáticas que permitieron las grandes cosechas de 1932 y 1934 no hicieron sino hundir todavía más los precios agrarios. El alza de algunos componentes de los costes (abonos nitrogenados, salarios, etc.) vino a añadir nuevos problemas a la coyuntura del sector⁶⁷.

Políticas instrumentales. Como ya hemos referido, la obtención de los equilibrios económicos básicos preocupó mucho desde el principio a la autoridad económica republicana. La estabilidad del cambio, el control del gasto público y la estabilidad de los precios fueron los tres grandes *objetivos formales* de esa política, junto a una sensibilidad real frente al problema del desempleo. Vemos, por tanto, que en este punto hay, en lo fundamental, una continuidad respecto de las etapas precedentes. Sin embargo, es de notar una disparidad clara en *las actitudes* respectivas que uno y otro régimen adoptaron ante tales objetivos: en el Gobierno republicano-socialista se aprecia una voluntad más decidida y un enfoque más serio y coherente, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que su estrategia fuera la adecuada, ni que los resultados obtenidos coincidieran con los deseados.

Consideremos en primer lugar los problemas de la *política fiscal*. Pese a lo que generalmente se suele pensar, la política presupuestaria republicana no surtió efectos recesivos. El objetivo de la nivelación presupuestaria no fue en la práctica cumplido, y el superávit de 1930 dio paso a nuevos déficits en los ejercicios siguientes. Ello se puede constatar en el cuadro 7.

Cuadro 7

Resultados presupuestarios 1929-1935 (millones de pesetas)

1930	1931	1932	1933	1934	1935
28	- 73	- 226	- 374	- 586	- 320

Fuente: Tomado de Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 251.

67. Hernández Andreu, 1980 (pp. 43-105) y 1986 (69-94).

A la vista de lo afirmado en el párrafo anterior, es fácil deducir que de nuevo nos encontramos ante un fracaso de la estrategia político-económica que tuvo a la postre consecuencias positivas; y es que caben pocas dudas de que en la coyuntura deflacionista general de 1931-1933, un saldo presupuestario de signo contrario hubiera intensificado aún más las tendencias recesivas. Pero, con todo, debe considerarse que el resultado presupuestario seguía siendo de escasa entidad cuantitativa en términos relativos, pues representaba apenas un 1,2% de la renta nacional en 1933⁶⁸.

La explicación más razonable del déficit la encontramos en la enorme y bien conocida dificultad que incorpora la reducción del gasto público cuando al mismo tiempo se desea expandir los programas sociales y abrir una dinámica de reformas.

Si se atiende exclusivamente al dato del saldo presupuestario, pudiera parecer que se produjo un regreso a la situación de la Dictadura: defensa de los principios ortodoxos del equilibrio y obtención de unos resultados en clara contradicción con ellos. Esta conclusión encuentra sin embargo una objeción de partida en que, cuando menos, los gobernantes republicanos reconocieron abiertamente lo que consideraban su fracaso y nunca se valieron de subterfugios ni maniobras para ocultarlo.

Ahora bien, en la estructura de los programas de gastos e ingresos públicos hubo algunas novedades dignas de ser resaltadas:

En primer lugar, la República prosiguió la tarea de corregir la muy desordenada composición del gasto público, ya iniciada en el presupuesto de 1930. En los primeros años treinta, los gastos en servicios generales y defensa continuaron predominando, pero pasaron ahora a tener un mayor protagonismo los gastos en servicios económicos, educación y pensiones, lo mismo que, ya en volúmenes más reducidos, los destinados a vivienda y sanidad⁶⁹. Es decir, durante los primeros años de la República, la política fiscal atendió más a los objetivos de redistribución y formación de capital humano de lo que lo había hecho en el pasado⁷⁰.

Los gastos en formación bruta de capital fijo se mantuvieron sólo ligeramente por debajo de la media porcentual de 1926-1929, pero también aquí se observa un cambio de orientación en el gasto, pues en la nueva etapa la inversión pública "se orientó principalmente hacia la construcción de obras intensivas en fuerza de trabajo (caminos vecina-

68. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 251.

69. Los gastos en servicios económicos pasaron de suponer una media del 15,8% sobre los totales en 1923-29 a un 21,7% entre 1931 y 1935, en tanto que los gastos en educación y pensiones pasaron de un 5 y un 5,4%, respectivamente, en 1926-29 a un 6 y un 7,8% en 1931-35. Cfr. Comín y Martín Aceña, 1984, p. 255.

70. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 255.

les, obras locales) que permitieran reducir el paro, y no hacia grandes obras ferroviarias o hidrográficas"⁷¹.

En la vertiente de los ingresos públicos también se observan algunos cambios de interés. La presión fiscal se estabilizó a partir de 1930 e incluso se redujo en algún ejercicio, lo que pudo actuar también de forma anticíclica⁷². Es de resaltar que esa reducción o estancamiento de la presión fiscal se debió a una disminución de la tributación indirecta, que se redujo desde un 33 a un 27 por ciento aproximadamente desde 1930 a 1935⁷³. La imposición directa por primera vez en muchos años, pasó a tomar la iniciativa.

En cuanto a la *política monetaria y financiera*, la nueva Ley Bancaria de 1931, ya comentada, tuvo un papel relevante en su articulación.

España vivió en 1931, como el resto de los países europeos, una grave crisis financiera. A la salida de los capitales extranjeros, que estaba en función de la anarquía reinante en los mercados internacional de capital, se unía aquí la ya mencionada retirada de fondos de las cuentas corrientes bancarias. Sin embargo, en nuestro país la situación no llegó a alcanzar ni de lejos la gravedad que tomó en Austria, Alemania o Italia⁷⁴. A diferencia de lo ocurrido en esos países aquí no quebró ninguna entidad bancaria importante⁷⁵ ni se hizo precisa operación alguna de salvamento en gran escala. Este hecho, que desde luego merece ser resaltado, se explica porque la retirada de fondos extranjeros fue aquí comparativamente muy inferior a lo que se dio en otros países, y sobre todo, por la justa intervención del Banco de España, el cual, bajo las condiciones marcadas por la nueva Ley Bancaria, cumplió mucho mejor que en el pasado su papel de prestamista en última instancia⁷⁶.

La crisis financiera, por lo demás, duró muy poco en España. Los recursos ajenos de las instituciones bancarias se recompusieron enseguida, pues aunque las cuentas corrientes continuaron su declive, éste quedó más que compensado por el aumento de las cuentas de ahorro, fruto del mayor poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias que provocó el proceso redistributivo⁷⁷.

71. Palafox, 1980-b, p. 38.

72. Los ingresos ordinarios del Estado representaban un 12,1% del valor de la renta nacional en 1930 y pasaron a suponer un 12,3 y un 11,7%, respectivamente, en 1932 y 1934. Cfr. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 250.

73. Comín Comín y Martín Aceña, 1984, p. 253.

74. Tortella, 1983, p. 131. Tortella y Palafox, 1983, pp. 52-53.

75. El caso del Banco de Cataluña constituye una importante excepción. En la quiebra de este banco estuvieron implicadas tanto motivaciones económicas como políticas (relacionadas estas últimas con los estrechos vínculos que el banco había tenido con el régimen dictatorial).

76. Martín Aceña, 1984, p. 300.

77. Tortella y Palafox, 1983, p. 59.

Contra lo que se ha solido creer, la política monetaria de los años 1931-1933 no actuó sobre la coyuntura económica en forma deflacionista. Es cierto que la oferta monetaria creció a ritmos menos vivos que en períodos anteriores, pero —tal y como se comprueba al observar de nuevo el cuadro 2— la evolución de los agregados monetarios fue bastante estable. Incluso en el contexto de la crisis financiera de 1931 las repercusiones sobre la cantidad de dinero fueron bastante limitadas⁷⁸.

En cuanto a la estructura de tipos de interés, es preciso concluir que, aun habiéndose mantenido ligeramente altos en esos años⁷⁹, también observaron un comportamiento altamente regular (véase el cuadro 2).

Nos parece fuera de duda que la suave contención monetaria se debió a desplazamientos en la demanda de crédito y no a eventuales restricciones en la oferta de fondos prestables. El problema monetario no fue de escasez de liquidez, como lo prueba el que ningún banco de cierta importancia se quejara en esos años de restricciones al crédito y sí de dificultades para darle “un empleo rentable y remunerador”⁸⁰, o que la línea de crédito del Banco de España sólo se usara en un 30%⁸¹.

Dado que, como decimos, la cantidad de dinero tendió a adaptarse, también en ese período, al ritmo de expansión de la demanda de saldos reales en forma más bien pasiva, consideramos que no puede afirmarse en modo alguno que a la política monetaria correspondiera una responsabilidad en la coyuntura recesiva: decididamente, las tendencias deflacionistas se generaban en el sector real de la economía.

En cualquier caso, el comportamiento de los precios se movió también en una línea de relativa estabilidad (una simple ojeada a la última serie recogida en el cuadro 1 permite extraer esa conclusión), no exenta desde luego de tensiones ni suaves tendencias a la caída. Pero la fuerte sacudida deflacionista que afectó a la economía mundial en esos años⁸² tuvo tan sólo un pálido reflejo en nuestro país, al menos hasta 1933. A

78. Según el que considereamos máximo experto en esa materia, Martín Aceña, la disminución de la oferta monetaria a lo largo de todo el año 1931 fue sólo de un 4%, debido sobre todo a que la flotación de la peseta permitió el aislamiento del sistema financiero español respecto de la crisis financiera internacional. Cfr. Martín Aceña, 1983-b, pp. 622 y 646.

79. Sobre todo si se comparan con los tipos nominales vigentes en otros países europeos. El tipo nominal de descuento aplicado por el banco central era en España superior al que existía en Francia, Suiza, Suecia, Gran Bretaña, Países Bajos, Checoslovaquia, etc., y sólo inferior al vigente en Austria y Alemania. Cfr. Martín Aceña, 1983-b, p. 647.

80. Así se expresa en la Memoria del Banco Español de Crédito correspondiente a 1932-33.

81. La utilización media de esa línea de crédito había sido del 50% en los años que precedieron a la República. Cfr. Tortella, 1983, p. 133.

82. Si tomamos el índice 100 para el año 1929, el índice correspondiente a 1932 era, para los casos de EE.UU., Gran Bretaña y Canadá, respectivamente, igual a 68, 75 y 69,8. Cfr. Morilla Critz, 1984, p. 139.

partir de ese año, con la agudización de las tendencias recesivas, la caída de los niveles de precios se hizo más intensa.

Ya para finalizar este recorrido por las diversas políticas específicas, veamos ahora brevemente cuál era la situación de la peseta y cuáles las actuaciones públicas destinadas a influir sobre ella.

Los dirigentes republicanos heredaron de Calvo Sotelo y Argüelles su obsesión por la estabilidad del tipo de cambio de la peseta, mostrándose más activos que aquellos para favorecerla. Realmente, tampoco ellos comprendieron que la depreciación estaba actuando como amortiguador de la crisis internacional⁸³. Con todo, la depreciación continuó hasta 1932, año en que por fin se invirtió la tendencia (obsérvese el cuadro 4). A partir de ese momento, y hasta 1934, la peseta no dejó de ganar valor frente al dólar y la libra esterlina.

Pero, claro, esa inflexión no se debió tanto a razones de política económica española como a la nueva situación internacional: Inglaterra, antigua portaestandarte de la ortodoxia había abandonado el patrón oro en septiembre de 1931 para devaluar su moneda, y dos años más tarde lo mismo hizo EE.UU. Ello provocó que 25 países se apresuraran a devaluar sus propias monedas. Lógicamente, en ese contexto, la actitud de las autoridades económicas españolas solamente podía conducir a la revalorización de la peseta, por mucho que ésta tuviera mucho de artificial.

Al fin, en 1934, con la peseta ya notablemente apreciada, se procedió a su estabilización, con el alineamiento formal en el llamado bloque del oro, que por entonces, y hasta 1936, encabezó Francia.

Por todo lo dicho, la política de tipo de cambio nos parece un error de bulto de los Gobiernos republicanos. Cuando los países de mayor potencial económico optaban por el equilibrio interno y adoptaban medidas drásticas en favor de la caída de sus tipos de cambio, en España se estaba en vísperas de la adscripción a lo que ya no era en gran medida más que un mito: el patrón oro. Sólo la firmeza —o tozudez— de las creencias económicas, junto a la gran influencia que ejercían las posiciones de los economistas franceses o el eventual deseo de abaratar las exportaciones pueden explicar tal actitud⁸⁴. Sea cómo fuere, el comercio de exportación español —centrado en producciones minerales y agra-

83. En España, el valor de las exportaciones en 1932 representaba casi el 98% de las habidas en 1929, mientras que en los casos de Francia, EE.UU., Alemania y Gran Bretaña los porcentajes del valor de 1932 sobre el de 1929 eran de 35,3, 30,5, 42,6 y 49,7% respectivamente. Cfr. Palafox, 1980, p. 17.

84. Se ha señalado (Hernández Andreu, 1986) que el alineamiento en el bloque-oro se explica por la importancia del comercio exterior con Francia y por la influencia que por entonces ejercía en nuestro país el pensamiento económico francés defensor de la ortodoxia. No obstante, pensamos que es de más peso otra vía de explicación: la presencia de una fuerte inercia doctrinal.

rias—, que ya estaba muy afectado por el hundimiento de los intercambios internacionales, sufrió un nuevo golpe por las consecuencias de ese error.

En resumidas cuentas, la política económica desarrollada entre 1931 y 1933 incorpora un esfuerzo de racionalidad respecto a la situación precedente y trata de adaptarse a las orientaciones de mayor justicia social, pero no parece caerle mal el calificativo de *política distraída* que ha utilizado el profesor Tortella⁸⁵. La situación internacional y los condicionantes políticos planearon siempre sobre las posibilidades de eficacia de esa política. Y por otro lado, tampoco en este período se consiguió cumplir con todas las metas que se habían definido como básicas. En este caso fue la obtención de la estabilidad de precios la que pasó por algunas dificultades, lo mismo que la nivelación presupuestaria, en tanto que la estabilidad cambiaria sí llegó a obtenerse a partir de determinado momento.

6. CONCLUSIONES

Del conjunto de argumentaciones contenidas en las páginas que anteceden podemos extraer como conclusiones principales las que a continuación se relacionan:

A) Entre la política económica de los años finales de la Dictadura y la del primer bienio republicano hallamos varias *semejanzas* muy llamativas:

- La política coyuntural estableció una misma jerarquía de objetivos en los dos períodos, y en ambos también se dió una parecida contradicción entre esos objetivos proclamados y las prácticas político-económicas desarrolladas. Pero mientras que en la Dictadura el contraste entre la adscripción formal a la ortodoxia y los hechos era total, la República buscó una mayor coherencia, dificultada en todo caso por numerosos problemas objetivos.

- Por otra parte, los instrumentos de política monetaria y fiscal de que se disponía eran escasos y rudimentarios, por lo que su utilización generaba magros efectos sobre la marcha de la economía.

- En general, las políticas específicas fueron elaboradas con poco rigor. Es llamativo que tanto en una como en otra fase el fracaso en la obtención de metas muy deseadas (estabilidad del cambio, reducción del gasto) actuase como un factor positivo. No debe olvidarse que la base teórica para la construcción de toda política económica era muy estrecha en la España de los años de estudio: el grado de desarrollo del

85. Tortella, 1983, p. 133.

análisis económico era reducido y estaba además mechado de concepciones vetustas y apriorísticas.

— La actitud compartida hacia el tipo de cambio también resulta significativa, por su falta de pragmatismo: el problema que quizá más preocupó a los gobernantes en lo económico afectaba en realidad a una parte mínima de la economía y la población españolas.

B) También encontramos importantes *disimilitudes* entre ambos períodos:

— Los responsables económicos hubieron de hacer frente a muy diferentes condicionantes políticos en una y otra etapa. Los Gobiernos republicanos, que no representaban a las antiguas clases dominantes, sufrieron las consecuencias del grave deterioro de las expectativas que introdujo el cambio político.

— Tuvieron que afrontar también muy diferentes coyunturas internacionales. Frente a la bonanza y optimismo generalizados de los años veinte, que estimularon el crecimiento interno durante la Dictadura, los años republicanos coincidieron con la gravísima recesión internacional, que lógicamente no dejó de afectar a nuestra economía, por mucho que su incidencia fuese aquí mucho menor que en el resto de Europa. El bajo grado de integración de la economía española en los flujos internacionales fue obviamente lo que permitió un relativo aislamiento de la crisis externa.

— Por otro lado, fue desemejante la concepción básica del crecimiento económico, que mientras en la Dictadura hacía recaer toda la responsabilidad en las grandes obras de infraestructura y la consiguiente expansión de la industria pesada, en la República se asentó sobre criterios de mayor diversificación. El cambio en tal modelo de crecimiento, inevitable, fue fuente de serios problemas en los primeros treinta.

— Las políticas estructurales, de ordenación, tuvieron una presencia mucho más activa en la República, pero por diversos motivos los resultados realmente obtenidos de ellas quedaron lejos de los deseados.

— En la República se observa una mayor atención a los objetivos redistributivos, prácticamente inexistentes con anterioridad. En este terreno sí cabe hablar de éxito, pues se operó un proceso efectivo de redistribución de la renta en favor de los trabajadores y las industrias ligeras.

C) En todo caso, por mucho que las diferencias coyunturales y la predisposición de las autoridades económicas fuesen diferentes en estas dos etapas de nuestra historia política, es imposible descubrir en ambas los rasgos básicos de una verdadera política económica; en otras palabras, se trata de un período histórico caracterizado por la *ausencia de un concepto de la intervención pública suficientemente coherente y ordenado*.

BIBLIOGRAFÍA

- BENAVIDES, L. (1972): *La Política Económica de la II República*, Madrid, Guadiana.
- CALLE, R. (1981): *La Hacienda en la II República Española*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- COMÍN COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1984): *La Política monetaria y fiscal durante la Dictadura y la II República*, Papeles de Economía Española, n.º 20, pp. 236-261.
- CALVO SOTELO, J. (1974): *Mis servicios al Estado. Seis años de gestión*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
- EGUIDAZU, F. (1979): *La crisis de la peseta y la caída de la Dictadura*, Cuadernos Económicos de ICE, n.º 10, pp. 299-352.
- EL SOL (1983): *Mr. Keynes nos habla de la crisis mundial*, 10 de junio de 1930, recogido en Papeles de Economía Española, n.º 17.
- FERNÁNDEZ BAÑOS, O. (1930): *Estudio de las fluctuaciones del cambio de la peseta*, Revista Nacional de Economía, septiembre.
- FLORENSA, S. (1979): *Economía y comercio exterior en la España de los años veinte*, Cuadernos Económicos ICE, n.º 10, pp. 462-495.
- FLORENSA, S. (1981): *Economía y política económica en la II República. Una nota de síntesis*. ARBOR, n.º 426-427, pp. 111-124.
- FLORES DE LEMUS, A. (1960): *Dictamen de la Comisión nombrada por Real Orden de 9 de enero de 1929, para el estudio de la implantación del patrón oro*, recogido en Información Comercial Española, n.º 318.
- GARCÍA DELGADO, J.L. (1980): *La política económica española de 1930: El "error Argüelles"*, Papeles de Economía Española, n.º 1, pp. 43-47.
- GARCÍA DELGADO, J.L. (1983): *Autoritarismo político y tensiones económicas: Un balance crítico de la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera en España (1923-1930)*, El Trimestre Económico, n.º 198, pp. 807-828.
- GARCÍA DELGADO, J.L. (1985): *Nacionalismo económico e intervención estatal 1900-1930*, en SANCHEZ ALBORNOZ, N. (comp.): *La modernización económica de España 1830-1930*, Alianza, Madrid, pp. 176-195.
- HERNÁNDEZ ANDREU, J. (1980): *Depresión económica en España 1925-1934*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- HERNÁNDEZ ANDREU, J. (1981): *La polémica Cambó-Calvo Sotelo sobre la valoración de la peseta*, Hacienda Pública Española, n.º 69, pp. 291-302.
- HERNÁNDEZ ANDREU, J. (1983): *Depresión estructural, comercio exterior y fuerzas monetarias en España 1925-1934*, Revista de Historia Económica, n.º 2, pp. 293-306.
- HERNÁNDEZ ANDREU, J. (1986): *España y la crisis de 1929*, Espasa-Calpe, Madrid.
- MARTÍN ACEÑA, P. (1983-a): *De la Dictadura a la República: la política monetaria española en 1930*, Investigaciones Económicas, n.º 22.
- MARTÍN ACEÑA, P. (1983-b): *La crisis financiera española de 1931 y la política monetaria del primer Gobierno de la República*, en G. ANES (ed.): *Historia económica y pensamiento social*, Alianza, Madrid, pp. 611-648.

- MARTÍN ACEÑA, P. (1983-c): *El problema del cambio y la política monetaria en España entre 1920-1935*, Papeles de Economía Española, n.º 17, pp. 335-340.
- MARTÍN ACEÑA, P. (1984): *La política monetaria en España 1919-1936*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- MELGUIZO, A. (1979): *El presupuesto de Calvo Sotelo*, Cuadernos Económicos de ICE, n.º 10, pp. 401-442.
- MELGUIZO, A. (1986): *El presupuesto de la Dictadura de Primo de Rivera. Una reconsideración*, en J.L. GARCIA DELGADO (comp.): *La crisis de la Restauración*, Siglo XXI, Madrid, pp. 225-254.
- MORILLA CRITZ, J. (1984): *La crisis económica de 1929*, Pirámide, Madrid.
- PALAFox, J. (1980-a): *La crisis de los años 30: Sus orígenes*, Papeles de Economía Española, n.º 1, pp. 30-42.
- PALAFox, J. (1980-b): *La Gran Depresión de los años treinta y la crisis industrial española*, Investigaciones Económicas, n.º 11, pp. 5-46.
- PALAFox, J. (1986): *Comercio exterior y vía nacionalista. Algunas consideraciones*, en J.L. GARCIA DELGADO (comp.): op. cit., pp. 179-197.
- SARDÁ, J. (1970): *El Banco de España (1931-1962)*, en *El Banco de España. Una historia económica*, Banco de España, Madrid.
- TAMAMES, R. (1973): *La República. La era de Franco*, Alianza, Madrid, pp. 55-150.
- TEDDE, P. (1984): *El Banco de España en la II República*, Papeles de Economía Española, n.º 20, pp. 262-265.
- TORTELLA, G. (1970): *El Banco de España entre 1829 y 1929. La formación de un Banco Central*, en *El Banco de España. Una historia económica*, op. cit.
- TORTELLA, G. (1983): *Los problemas económicos de la II República*, Revista de Estudios Políticos, n.º 31-32, pp. 121-135.
- TORTELLA, G. y PALAFox, J. (1983): *Banco e industria en España 1918-1936*, Investigaciones Económicas, n.º 20, pp. 33-64.
- TUÑÓN DE LARA, M. (1967): *Historia y realidad del poder*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, pp. 115 y sgtes.
- TUÑÓN DE LARA, M. (1985): *Tres claves de la Segunda República*, Alianza, Madrid, pp. 219-285.
- VELARDE, J. (1973): *Política económica de la Dictadura*, Guadiana, Madrid.
- VELARDE, J. (1979): *La política económica de la Dictadura, cincuenta años después*, Cuadernos Económicos de ICE, n.º 10.
- VELASCO, C. (1979): *Concentración e intervención en la Dictadura: Hechos e ideas*, Cuadernos Económicos de ICE, n.º 10.